

23 Julio 2009
Honorable Peter Kent
Ministro de Estado de Asuntos Exteriores (Américas)
Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional
125 Sussex Street
Ottawa, ON K1L 8^a1

Estimado Ministro,

El “Americas Policy Group”(APG) o Grupo de Orientación Política para las Américas, un equipo de trabajo del Consejo Canadiense para Cooperación Internacional, le escribe para solicitarle que inste al Gobierno de El Salvador a emprender una investigación rápida e imparcial sobre la tortura y asesinato de Marcelo Rivera, un destacado salvadoreño defensor de derechos humanos y activista comunitario.

El cuerpo torturado de Marcelo Rivera fue hallado el 1 de Julio – once días después de su desaparición – en el curso de una retrasada búsqueda llevada a cabo por la policía local solamente después de que los líderes comunitarios hubieran presionado públicamente a actuar a oficiales de seguridad de alto rango.

Marcelo Rivera era un representante legal de la Asociación de Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC) y un activista en la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (la Mesa) – organización de la cual ASIC es miembro. La Mesa es un foro de aproximadamente unos 120 gobiernos municipales, grupos comunitarios, iglesias y organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo investigaciones, educación pública y eventos coordinados sobre asuntos mineros en El Salvador. Era también la figura principal en debates públicos sobre el futuro de la minería en El Salvador incluyendo una reciente controversia que resultó en la denegación de permisos de explotación a la empresa minera canadiense Pacific Rim por sus operaciones en el emplazamiento minero El Dorado.

Recientemente cuatro miembros de una pandilla han sido acusados por el asesinato del Sr. Rivera y se ha hecho público un informe por la oficina del Fiscal General sobre las circunstancias de su muerte. De acuerdo con dicho informe, la muerte del Sr. Rivera fue el resultado de una discusión entre el mismo y los citados pandilleros durante una borrachera.

Muchos, que conocían al Sr. Rivera, han descartado este informe. Afirman que el Sr. Rivera no estaba envuelto con miembros de pandillas y concluyen que el motivo de su asesinato está conectado a su trabajo como defensor de derechos humanos y activista.

Grupos sociales civiles en El Salvador están preocupados de que este tipo de asesinatos, que frecuentemente son descartados por las autoridades como ligados a violencia de pandillas, sean una reminiscencia de asesinatos al estilo de escuadrones de la muerte previamente ligados al partido ARENA y que están aumentando en El Salvador.

El año pasado oficiales y parlamentarios canadienses se reunieron en Ottawa con un colega del Sr. Rivera. Bernardo Belloso había venido a Ottawa de parte de la Mesa para expresar las preocupaciones de la organización acerca de la viabilidad de la minería en El Salvador así como el papel de buscadores de minas canadienses en su país. La APG facilitó el contacto del Sr. Belloso con oficiales y parlamentarios. Mientras que la APG no toma partido respecto a si la minería debería o no continuar en El Salvador, creemos que es fundamental que el debate público y las discusiones sobre esta cuestión se produzcan de manera libre en El Salvador. Este tipo de debate libre queda obviamente cerrado y se hace imposible cuando activistas y defensores de derechos humanos se convierten en el objetivo de asesinatos al estilo de los escuadrones de la muerte.

Compartimos la inquietud de nuestros colegas en El Salvador respecto al hecho de que el asesinato del Sr. Rivera pudiera estar relacionado con sus actividades como defensor de derechos humanos y con su trabajo con la Mesa. Es necesaria una investigación adicional para esclarecer las circunstancias de la muerte de Marcelo Rivera.

Específicamente lo que solicitamos del Gobierno del Canadá es que apele al Gobierno de El Salvador para:

Asegurar que la Oficina del Fiscal General lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Marcelo Rivera. Debe ponerse especial cuidado en asegurar que los fiscales elegidos no tengan expedientes por haber sido cuestionados por la comisión de violaciones serias de proceso en acusaciones de casos anteriores con presuntos lazos políticos. La investigación debería culminar con la acusación de todos aquellos que resultaran responsables de su muerte.

Además la investigación debería examinar si este acto estaba relacionado con su notorio trabajo como activista de derechos humanos o con su trabajo de apoyo a los derechos de los locales a resistirse a la imposición de minerías extranjeras en su tierra natal.

Agradecemos de antemano que aborde estas importantes preocupaciones. Quedamos a la espera de su respuesta.

Atentamente,

Jim Hodson
Co-presidente APG

Nadia Faucher
Co-presidenta APG